

Se estima que el costo fiscal por lo ocurrido asciende a los US\$ 350 millones:

Probidad se toma la agenda con despliegue de candidatos por uso irregular de licencias

Evelyn Matthei y José Antonio Kast volvieron a tener pautas similares a la misma hora con propuestas para endurecer la vigilancia de quienes utilizan este derecho establecido en la ley.

También hubo una arremetida de los congresistas de ambos sectores, con el ingreso de querellas por parte de RN y el PS, mientras que la UDI entregó una carta al Presidente Boric.

J. P. GUZMÁN y B. COURT

Matthei y Kast coinciden en que involucrados deben quedar impedidos de trabajar en el Estado



Kast acusó que el uso de licencias se ha vuelto "una industria del abuso".

Sanciones, un control más estricto y mayores sumarios. Son todas propuestas con las que ayer los candidatos presidenciales de oposición, Evelyn Matthei (UDI), y José Antonio Kast (P. Republicano), se desplegaron frente al escándalo asociado a las irregularidades en el uso de licencias médicas entre funcionarios públicos (ver C1). Además, con esto se marcó un nuevo episodio en que ambos abanderados realizan pautas similares en el mismo día para presentar medidas, en una suerte de disputa por la agenda. De hecho, esta continúa copada por los temas de probidad, tal como ha sucedido con el caso Procultura. Aunque ambas situaciones tienen matices distintos, dado que este no afecta directamente ni al Gobierno ni al oficialismo, también hay similitudes ya que involucra irregularidades en el uso de recursos públicos. Así, hay quienes explican que en la

derecha se está mirando el tema con atención porque lo sucedido daría cuenta de un "Estado burocrático" que debe ser reformado, justo una idea que las candidaturas opositoras han puesto como eje. En el caso de Matthei, explicó que su plan anticorrupción contempla un control más severo a las licencias de los funcionarios públicos, sumarios por parte de Contraloría cuyas sanciones deben ser aplicadas por los jefes de servicio y el impedimento de por vida de trabajar en el Estado, junto con la obligación de devolver el dinero a quienes sean sorprendidos. La exalcaldesa, además, afirmó que el Gobierno "llegó tarde" con sus propuestas por este tema y deslizó una crítica contra la justicia sobre la cual dijo que "tampoco ha colaborado". Mientras que Kast aseguró que "lo que debía ser un derecho para los trabajadores que realmente lo necesitan, se ha convertido

en una industria del abuso". Agregó que "el Estado se ha convertido en el empleador más permisivo del país". En este contexto, el candidato propuso cinco medidas: solicitar a Contraloría una investigación de lo ocurrido entre 2018 y 2022, período del Presidente Sebastián Piñera, para "terminar con el fraude", reformar el Estatuto Administrativo para que el mal uso de licencias médicas sea causal directa de despido y prohibición de recontractación, y reformas institucionales para que los sumarios sean más "ágiles". Por otra parte, también le exige al Gobierno que "deje de postergar la aplicación de una ley ya aprobada y lista para ejecutarse", la 20.585, que regula el uso de licencias médicas. Y por último, propone "acciones concretas para que los dineros públicos mal utilizados sean restituidos", y sanciones para las autoridades que no actuaran.



Matthei optó por ir a Maipú y estuvo reunida con usuarias de la Junji.

Congresistas arremeten con querellas y cartas

No solo fueron los candidatos presidenciales los que se desplegaron ayer por el uso irregular de las licencias médicas, sino también congresistas tanto del oficialismo como de la oposición. Muestra de ello fue la acción impulsada por la bancada de diputados de RN, quienes acudieron hasta el Ministerio Público para ingresar una denuncia por posible fraude de subvenciones, tanto por parte de los funcionarios involucrados como también de los médicos que dieron las licencias. En tanto, la directiva de la UDI, encabezada por el presidente del partido, Guillermo Ramírez y su secretario general, Juan Antonio Coloma, optaron por acudir a La Moneda a dejarle una carta al Presidente Gabriel Boric. ¿La razón? Solicitarle que evalúe el despido de los 25 mil involucrados que habrían salido del país mientras estaban en esta situación. "Necesitamos que se tomen acciones ya. Y esto significa pedir la renuncia, transparentar quiénes son y saber cuáles son las más de 700 institu-

“Necesitamos que se tomen acciones ya. Y esto significa pedir la renuncia, transparentar quiénes son y saber cuáles son las más de 700 instituciones donde estas personas han presentado licencias”.

JUAN ANTONIO COLOMA
SECRETARIO GENERAL DE LA UDI

ciones donde estas personas han presentado licencias". Por otra parte, el jefe de bancada de los senadores del PS, Juan Luis Castro, acudió al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para solicitar la protección de los recursos públicos involucrados, motivo por el cual se reunió con su presidente, Raúl Letelier.

Jara (PC) endurece el tono y apoya despidos

La abanderada presidencial del Partido Comunista y Acción Humanista, Jeannette Jara, se refirió al polémico informe de la Contraloría y aseguró estar de acuerdo con destituir a los más de 25 mil funcionarios públicos que viajaron al extranjero con licencias falsas. La exministra se refirió a la polémica luego de su participación en la actividad "Autonomía y derechos, sin retrocesos: Encuentro programático con mujeres por un Chile justo e inclusivo", realizada en el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), en la que la abanderada sostuvo un encuentro junto a dirigentes sociales. Después del encuentro, la candidata dijo que "es una de las determinaciones que Contraloría General de la República seguramente va a establecer, pero me parece que es una falta grave a la probidad y, por tanto, debe ser sancionada con la destitución del cargo", sostuvo la abanderada. De esta manera, argumentó que "son conductas

“Son conductas que son del todo inadecuadas y que, por algunos, se mancha la labor que desarrollan miles y miles de funcionarios públicos”.

JEANNETTE JARA
CANDIDATA PRESIDENCIAL PC Y ACCIÓN HUMANISTA

que son del todo inadecuadas y que, por algunos, se mancha la labor que desarrollan miles y miles de funcionarios públicos muy comprometidamente con el país. Hay que recordar que en Chile hay más de 850.000 funcionarios públicos, pero quienes cometieron estas conductas deben hacerse responsables".